

al conocerse la muerte de Humberto 1° rey de Italia. Esta sirena, como parte de la prédica periodística, se convirtió en una tradicional anunciadora de grandes acontecimientos nacionales y mundiales.

Sus bronce, placas, objetos de arte, pinturas, documentos y, en fin, todo el conjunto de esta construcción debe ser salvaguardado, ya que forman y conforman una unidad cultural indisoluble, con valor patrimonial histórico nacional.

Su destino debe necesariamente afectarse a fines de exposición y servicio hacia todos los argentinos y ciudadanos del mundo que nos visiten guardando, así, testimonio para nosotros y para nuestra posteridad de una época de la historia arquitectónica, política, periodística, cultural y social de nuestro país.

Esta iniciativa que pongo a vuestra consideración pretende preservar esta construcción magnífica y representativa, con todo el conjunto arquitectónico edilicio y sus componentes interiores. Su declaración como monumento histórico procurará el mantenimiento y cumplimiento de tal objetivo.

Su biblioteca, su célebre farola, sus bronce, placas, objetos de arte, pinturas, documentos y, en fin, todo el conjunto de esta construcción debe ser salvaguardado, ya que forman una unidad cultural indisoluble, con valor patrimonial histórico nacional.

Su declaración como monumento histórico nacional procurará el mantenimiento y cumplimiento de tal objetivo.

2

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR SNOPEK

La discusión sobre la limitación al poder penal del Estado, lamentablemente, requiere en forma continua el desarrollo de nuevos argumentos para la defensa de garantías que, sin embargo, ya han cumplido más de 200 años de historia. Esto es lo que debería surgir del recinto: argumentar en favor y en contra de la garantía que reza: *nullum crimen, nulla poena sine iudicio*; es decir, aquel principio que resguarda la exigencia más básica de una administración de justicia penal conforme con el estado de derecho: ningún individuo puede ser castigado en forma legítima sino antes de que un juez imparcial, independiente, bajo el respeto de todas las manifestaciones del derecho de defensa y luego de una producción de prueba pública y oral, formule una sentencia de condena (juicio previo). En pocas palabras: la madre de todas las garantías procesales y quizá materiales en el ámbito del derecho penal, de ella emanan el principio de inocencia, el *in dubio pro reo*, etcétera.

No se dice nada nuevo si se recuerda la vigencia práctica de este principio: las cárceles están llenas de ciudadanos inocentes, personas sobre las cuales debe caer, todavía, la única manifestación legítima sobre su culpabilidad o inocencia, ciudadanos que han sido sacados de sus casas, de su familia, de su entorno sociolaboral, afectivo, ciudadanos que están todavía sujetos a que se les diga que no son culpables luego de dos o más años de tremendo sufrimiento, de enorme "desocialización".

El proyecto que se discute pretende poner algún coto razonable a este uso indiscriminado de violencia estatal. La idea básica del proyecto que se nos somete a análisis y aprobación, reside en que si el Estado, con la lentitud propia de sus mecanismos burocráticos, no logra resolver el conflicto penal dentro de un plazo de dos años y durante esos dos años ha tenido encerrado al ciudadano procesado, no permita, a partir de ese momento, que la continuación del estado de incertidumbre se sustente sobre la limitación de la libertad del individuo. El Estado, si ello se justifica, puede contar con el tremendo instrumento de encerrar durante dos años, y a veces seis meses más, a un individuo procesado para fortalecer el aseguramiento de los propios fines del proceso, pero, y ello es indiscutiblemente razonable, todo instrumento debe estar limitado por otros objetivos netamente indelegables en el estado de derecho, y de los cuales el

propio Estado es guardián, por ejemplo, una garantía tan básica en el sistema constitucional como el respeto a la libertad ambulatoria.

Sólo se busca que la prisión preventiva no siga cumpliendo la función que le corresponde a la misma pena estatal. Hoy no caben demasiadas dudas de que ante la exigencia de enviar lo antes posible un mensaje de confirmación del valor protegido por la norma, luego de producido el delito, y sumado a la crónica lentitud de los sistemas de justicia penal de toda América latina, se utiliza a la prisión preventiva como instrumento —absolutamente ilegítimo— de la prevención general —positiva—. En este punto la mala influencia de los medios de comunicación social es evidente.

Si nos detuviéramos unos minutos a repasar cuál es el origen funcional de la prisión preventiva veremos que ella nace muy unida a los costos producidos por la necesidad de vigencia de otra garantía básica de la justicia penal como es el derecho de defensa. La garantía del derecho de defensa implicó, desde un comienzo, la necesidad de que el imputado estuviera presente al momento de producción de las pruebas durante el desarrollo del debate —juicio oral—. Ello obligaba, en caso de fuga del imputado, a la suspensión del debate, es decir a la no realización del juicio y la correspondiente obstrucción de la aplicación de la justicia penal. De allí nace la razón por la cual el Estado debe, en ocasiones, retener al imputado asegurando su presencia en este momento. El único fundamento entonces del uso de este grave instrumento procesal, que respeta el origen político criminal de la figura es el peligro de fuga; nada tienen que hacer aquí consideraciones de índole material como la naturaleza del delito cometido. Ello marca la necesidad, sin ninguna duda, de un uso excepcional de la medida, toda vez que no siempre existe peligro de fuga o que, aún demostrado este peligro, es posible anularlo con una medida menos violenta como, por ejemplo, el arresto domiciliario.

Además, debemos alejar el fantasma equívoco y peligroso de la inseguridad. La aplicación de esta ley no aumentará los niveles de inseguridad. En primer lugar, porque la aplicación inmediata de esta ley no beneficiará a más de 650 internos procesados que ya han sufrido, siendo todavía inocentes, el castigo carcelario durante una enormidad de tiempo.

En segundo lugar, porque la inseguridad ciudadana está más vinculada al desarrollo de políticas preventivas y de asistencia a la víctima que a la violación sistemática de los derechos individuales de los procesados.

Una justicia penal alejada del estado de derecho no mejora, de ningún modo, el nivel de seguridad ciudadana.

En tercer lugar, la imposibilidad de aplicación de la prisión preventiva no implicará, claro está, que el sistema procesal penal no pueda acudir a otras medidas asegurativas de los fines del proceso alternativas a la privación de la libertad (detención domiciliaria, obligación de ausentarse de una localidad, obligación de presentarse en el tribunal cada cierto tiempo, etcétera).

Es preciso, que tengamos clara conciencia de que a nivel universal e, incluso, dentro de nuestra evolución histórica, este proyecto no representa más que un modelo razonable de coerción procesal y, no es, de ningún modo, el sistema más beneficioso para el procesado. A nivel mundial, muchos países utilizan plazos menores y, nuestro propio régimen procesal anterior al vigente, inquisitivo y anticuado, establecía un límite nunca superable de dos años, límite luego desnaturalizado en forma totalmente injustificada por nuestra jurisprudencia.

Por último, nuestras cárceles, deben cumplir con el imperativo legal y ético de resocializar a quien ha cometido un ilícito, ninguna resocialización es posible en condiciones de hacinamiento, asimismo la causal más protagónica de ese hacinamiento, es la sobrepoblación carcelaria, y el 57% de los presos son procesados. Ello nos indica el camino para el mejoramiento del sistema carcelario, para la dignificación de la justicia penal, y para el propio enaltecimiento de la labor como legisladores en busca del estado de derecho.

Art. 2º — Son beneficiarios de este régimen, los adquirentes o importadores de los referidos bienes, en tanto los mismos sean destinados al proceso productivo orientado hacia la venta en el mercado externo, y los sujetos acogidos al régimen de la ley 24.966 que realicen inversiones en obras civiles y construcciones para proporcionar la infraestructura necesaria para la producción de bienes destinados a la exportación.

Art. 3º — A los fines previstos en el artículo anterior, se entenderá que el proceso productivo se encuentra orientado hacia la venta en el mercado externo conforme a los requisitos y condiciones que al respecto establezca la autoridad de aplicación.

El incumplimiento de las condiciones dispuestas hará decaer la franquicia otorgada, en cuyo caso los beneficiarios deberán reintegrar al fisco, los intereses que éste hubiera tomado a su cargo, en la forma y condiciones que al respecto establezca la autoridad de aplicación, la que podrá asimismo aplicar una sanción gravable entre el cincuenta por ciento (50 %) y el ciento por ciento (100 %) de los referidos intereses.

Art. 4º — El presente régimen se implementará a través de una línea de créditos, que las entidades financieras regidas por la ley 21.526 y sus modificaciones podrán otorgar a los sujetos mencionados en el artículo 2º, destinados al pago del impuesto indicado en el artículo 1º.

Art. 5º — El Estado nacional compensará a las entidades financieras por los créditos previstos precedentemente con una retribución que no podrá superar el equivalente al doce por ciento (12 %) de tasa efectiva anual aplicable sobre los mismos.

Art. 6º — La retribución a la que se refiere el artículo anterior se efectivizará, permitiendo que las entidades financieras que adhieran al régimen, computen

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados

Art. 11. — La autoridad de aplicación del presente régimen será la Secretaría de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, quedando facultada para interpretar y determinar en cada caso sus alcances y para dictar las disposiciones pertinentes, pudiendo requerir a tal efecto la colaboración de las secretarías de Industria, de Minería y de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Art. 12. — Facúltase al Poder Ejecutivo para modificar la graduación de la sanción prevista en el segundo párrafo del artículo 3º y el porcentaje de la tasa efectiva anual establecida en el artículo 5º.

Art. 13. — Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto para las inversiones que se realicen entre dicha fecha y la que fije el Poder Ejecutivo como plazo de finalización del régimen.

Art. 14. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Minería - Honorable Cámara de Senadores.

Art. 11. — La autoridad de aplicación de la presente ley será fijada por el Poder Ejecutivo, quedando facultada para interpretar y determinar en cada caso sus alcances y para dictar las disposiciones pertinentes.

Id.

Id.

Id.

3

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ROMERO FERIS

Reforma al Código Penal

Señor presidente: la reforma al Código Penal en tratamiento, que tiene su origen en un proyecto del Poder Ejecutivo, propone limitar el tiempo de encarcelamiento de aquel que teniendo prisión preventiva no cuenta con sentencia. Y lo hace de dos maneras: una, mediante la excarcelación casi automática del imputado al término de los dos años de detención; otra, beneficiándolo con el doble cómputo del tiempo de prisión o reclusión.

Para el tratamiento de este tema debe meritarse cuál es el fin perseguido en el proyecto, puesto que tiene una importante repercusión social, sobre todo en momentos en que se observa el incremento de la delincuencia en todo el país.

Así, debe tenerse perfectamente en claro si el objetivo es que los detenidos sin condena puedan recuperar la libertad al cabo de los dos años, o que se agilicen los procesos y se preserve la integridad de la persona que se presume inocente.

Creo que un objetivo deshecha al otro, pues contrariamente a lo que este proyecto propone en teoría, en la práctica ambos fines serán contrapuestos.

En efecto señor presidente, el proyecto en estudio propicia que cumplidos los dos años y seis meses de detención —sin que exista condena— automáticamente quedará excarcelado quien esté imputado en una causa, cualquiera sea la gravedad del delito.

De esta forma no tengamos la menor duda de que el mejor abogado defensor será aquel que logre, mediante

excepciones, recursos y otras defensas procesales, llegar a los dos años y seis meses sin que el juez de la causa pueda dictar sentencia, consiguiendo así que su defendido logre la libertad ambulatoria y burle el sentido de la ley penal.

Debemos tener en cuenta que quienes actualmente cumplen prisión preventiva son aquellos procesados por uno o más delitos cuya pena excede los 8 años de prisión, o bien tenga condenas anteriores, así podrán gozar de este nuevo beneficio quienes estén acusados por delitos graves, tales como homicidio doloso en todas sus formas, secuestro extorsivo, robo agravado, traición a la patria y otros delitos de semejante gravedad.

La misión de administrar justicia ha sido, desde los comienzos de las sociedades humanas, atributo propio de la soberanía. El Estado es el censor legal de las pasiones humanas y el centinela avanzado de la moral de las naciones civilizadas.

Actualmente, nuestros tribunales han aplicado el beneficio de dos años como máximo para aquellos procesados que no tuvieran condena pero no en forma automática, sino luego de un estudio pormenorizado de cada caso.

Así, la sana doctrina y la jurisprudencia penal, aconsejan no tener en cuenta aquellos actos procesales dilatorios que intente el defensor, a los fines del cómputo de la prisión preventiva, conocidos también como "chicanas procesales" dentro del ámbito tribunalicio, que sólo tienen como objeto obstaculizar el proceso.

Es decir que actualmente, se concede el beneficio pero restándole el tiempo insumido en actos procesales

que tiene origen en una solicitud del procesado, cuando a juicio del tribunal hayan tenido como efecto retrasar el curso del proceso.

Por ello, aprobar este proyecto es alentar la deslealtad procesal ante el tribunal, en detrimento del fin perseguido por la ley y la justicia, el cual es la investigación de los hechos y el castigo del delito.

Sin lugar a dudas, los procesos se volverán más lentos en los casos de delitos graves en que la situación del imputado se encuentre comprometida, debido a que la defensa tratará por todos los medios de que no haya sentencia durante dos años y seis meses.

Una justicia lenta, un proceso prolongado y tedioso, conlleva a la injusticia de mantener en la incertidumbre a quien se encuentra privado preventivamente de su libertad, como también a la gran injusticia de no hacerse justicia.

Por ello, la víctima de un delito que no ve llegar a tiempo una sentencia condenatoria, describirá de nuestro sistema judicial y del orden jurídico en general. Y esto es lo más grave que le puede suceder a un pueblo.

Nuestra justicia toda —la penal no es la excepción— se encuentra en crisis. El estado en que se encuentra la infraestructura edilicia del Poder Judicial resulta francamente alarmante. Los edificios se cierran por falta de seguridad, ello ha sucedido en la justicia laboral por muchos meses y respecto de la civil estamos a casi un año del cierre de uno de los principales edificios en esta Capital Federal y aún continúan algunos juzgados sin funcionar.

Actualmente también se teme por la seguridad de un edificio que alberga a juzgados comerciales, donde los expedientes que se encuentran en pleno trámite son llevados al archivo —ubicado en la planta baja— para eliminar peso a los pisos superiores.

A ello se suma la baja remuneración de sus empleados, que no tienen la categoría de funcionarios, pero que el magistrado delega en ellos la responsabilidad de llevar causas, dirigir audiencias y demás tareas esenciales para llevar adelante un juzgado.

Con estos elementos no puede esperarse sino una justicia lenta, un proceso penal prolongado y tedioso, por falta de material humano y tecnológico.

Podré no ser original al decir que "la justicia tardía no es justicia", pero es una frase que encierra una verdad irrefutable. Cuando el ciudadano no encuentra respuestas en el Poder Judicial, lamentablemente las buscará por mano propia o asumirá estoicamente la impunidad del delincuente.

Por ello, creo firmemente que no debe buscarse la solución en proyectos que permitan la existencia de un mayor grado de impunidad, sino en el fortalecimiento de una justicia digna que permita la atención y resolución de las causas a su estudio.

El problema del abarrotamiento de los juzgados penales como también el hacinamiento en los institutos penitenciarios no lo solucionaremos con este proyecto que ataca los efectos pero no las causas.

El forzoso trato y contacto con los criminales corrompe a los hombres relativamente honestos y empeora a los dudosos y vacilantes.

Desde hace muchos años las cárceles se han convertido en una especie de clubes de delincuentes. Allí es

donde se reúnen, cambian ideas, recíprocamente se depravan, aprenden sus engaños y donde se crean verdaderas bandas que planifican nuevos golpes para cuando se encuentren en libertad.

Con el proyecto en tratamiento se pretende cumplir con lo establecido en el Pacto de San José de Costa Rica. Yo aplaudo esta iniciativa, pero opino sin lugar a dudas que sería más conveniente para el país cumplir acabadamente con otra disposición mucho más importante. Me refiero al artículo 5º inciso 4 que prescribe que "los procesados deben estar separados de los condenados salvo en circunstancias excepcionales y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas".

Es evidente que haremos mucho más por el detenido preventivamente si adoptamos una decisión de fondo en materia de política carcelaria que estableciendo un límite de detención como el que aquí se propone.

Para un inocente es mucho más grave convivir durante dos años con delincuentes, en la realidad de los actuales institutos penitenciarios, que pasar mayor tiempo en prisión pero en un lugar más digno y adecuado a su condición de inocente, hasta que se pruebe lo contrario.

El inciso 1º del artículo 5º del Pacto de San José de Costa Rica establece el derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral. Y yo me pregunto señor presidente, ¿quién se puede sentir protegido compartiendo la celda con peligrosos delincuentes condenados a varios años de reclusión?

No será necesario esperar dos años. En menos de dos meses habrá sufrido violencia física y moral, y deberá tener una gran fortaleza espiritual para mantener la integridad psíquica.

Esa es la realidad del sistema penitenciario argentino y nada se hace por reparar semejante anomalía.

El Estado nacional debe emprender ya mismo una política carcelaria y judicial coordinada para dotar a nuestra Nación de los elementos necesarios, tanto en materia de recursos humanos como en los materiales para que pueda funcionar correctamente.

Encuentro razón a quienes piensan en aquellos que se hallan transitoriamente privados de su libertad, cuando debe prevalecer la inocencia, pero no creo que pueda serle útil a ese inocente que se le compute doblemente el tiempo de detención en prisión preventiva.

Su inocencia deberá conllevar al sobreseimiento, por lo que este instituto no lo favorecerá. En cambio se beneficiará a quien resulte condenado, toda vez que se acortará sensiblemente el tiempo de reclusión.

En un sistema de plenas garantías como el nuestro, donde el ciudadano las ejerce mediante el principio de inocencia, la impugnación de los actos procesales y la vía recursiva de las decisiones del juez por ante la Cámara de Apelaciones o ante el máximo tribunal —por decisiones tales como la denegación del beneficio de excarcelación—, el límite de dos años propuesto tendrá como efecto que los abogados defensores planteen innumerables impugnaciones y recursos, promuevan recusaciones y demás defensas con el único fin de obstaculizar el trámite procesal, dilatando sucesivamente la posibilidad del dictado de la sentencia.

No tengo la menor duda de que si actualmente los procesos penales duran demasiado tiempo, la aprobación

de este proyecto producirá que ninguno tarde menos de dos años y medio, por lo menos en aquellos casos de delitos graves donde el procesado sea culpable.

Creo entonces que debemos tener en cuenta principalmente al sujeto pasivo, es decir al ciudadano que cumple la ley y es potencial o efectiva presa del agente delictivo.

¿Cómo podremos explicarle a la víctima de un delito que quien le produjo el daño ha sido excarcelado porque la justicia se encuentra abarrotada de expedientes?

Entonces, si tenemos en cuenta a la víctima potencial, es decir a la sociedad toda, como la parte a quien debemos dar una respuesta, no puedo sino oponerme a este proyecto.

El hombre de la calle necesita respuestas concretas a su falta de seguridad personal, la de su familia y la de sus bienes.

Jiménez de Asúa refiriéndose a otro instituto, pero que guarda similitud con el tema en tratamiento, expresó que "la condena condicional se funda en un enorme error: la determinación a priori de la carencia de peligro de ciertos criminales, el acto insignificante de un delincuente primario puede ser un paréntesis aislado en su vida, pero también puede ser el síntoma primero de su estado peligroso de naturaleza continua. Esto a priori no puede decidirse. Renunciar, en tal caso, a la medida correctiva, educadora y de defensa que la pena representa, es aumentar la criminalidad en vez de restringirla".

No se pretende tomar al pie de la letra este pensamiento, que fue expresado en otro tiempo y en otras épocas, pero tampoco pasar al otro extremo.

Es por ello, señor presidente, que voy a votar negativamente el dictamen de comisión.